



CONSEJO DE SEGURIDAD
7180ª Sesión

Intervención de la Embajadora María Cristina Perceval
Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas

La situación en Medio Oriente
Remisión de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional
Explicación de voto de la República Argentina

Nueva York, 22 de mayo de 2014

SECURITY COUNCIL
7180th Meeting

Statement by Ambassador María Cristina Perceval
Permanent Representative of the Argentine Republic to the United Nations

The situation in the Middle East
Referral of the situation in Syria to the International Criminal Court
Explanation of vote by the Argentine Republic

New York, 22 May 2014

Señor Presidente,

Desde que ingresáramos a este Consejo en enero de 2013 y en numerosas ocasiones, la Argentina apoyó la remisión de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, para que ésta pudiera ejercer imparcialmente su jurisdicción respecto de todas las partes involucradas en lo que constituye una de las realidades más crueles, atroces y abrumadoras de nuestro tiempo.

Dejar que la respuesta a los crímenes cometidos por todas las partes en Siria sea la perpetuación de la impunidad no sólo corroe las bases éticas, políticas y jurídicas de las Naciones Unidas, sino fundamentalmente la responsabilidad de este Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales, en el entendido de que hoy resulta insostenible y hasta ofensivo pretender reeditar la falsa dicotomía entre paz y justicia: todos hemos aprendido que sin paz no hay justicia y que sin justicia peligra la paz.

Es así que por convicción política, responsabilidad ética y apego al derecho internacional, la Argentina ha votado favorablemente la remisión de la situación en Siria a la CPI con la única, firme y clara finalidad de que la Corte investigara y juzgara a los responsables de los graves crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y se reconociera el derecho inalienable de las víctimas a “verdad, memoria, justicia y reparación”.

Pero, al mismo tiempo, la Argentina decidió no copatrocinar esta iniciativa porque es también nuestro el objetivo de preservar la integridad del Estatuto y ello exige que las remisiones que este Consejo define, deban ser formuladas en los términos adecuados a fin de que no resulte cuestionado el fundamento jurídico del Estatuto de Roma, ni menoscabada la validez y eficacia de la Corte.

Señor Presidente:

Por una parte, pareciera que una y otra vez se intenta que aceptemos como normal, el ejercicio de la selectividad cuando de justicia se trata. Que no nos sorprendamos por el hecho de que ante situaciones equivalentes donde se cometen graves crímenes, algunas se consideren susceptibles de ser referidas a la Corte, mientras que otras no.

Por otra, pareciera que se procura hacernos creer que el hecho de menoscabar la integridad de los instrumentos jurídicos en nada lesiona el objetivo de alcanzar justicia. Para ello se recurre en algunos casos a mencionar los valores más sublimes, en otros a esgrimir argumentos muy sofisticados, aunque mayoritariamente se apele al pragmático principio que afirma que “el fin justifica los medios”. Pero lo sabemos por experiencia: no cualquier medio conduce al fin buscado.

Para la Argentina y para muchos Estados miembros ni la normalización de la arbitrariedad, ni la regresividad jurídica, ni el pragmatismo sin valores son opciones válidas.

Para nosotros todo crimen atroz debe ser juzgado, donde quiera sea cometido, y cualesquiera sean sus perpetradores. Y así como con los derechos humanos no podemos decir que respetamos unos pero que no reconocemos otros, tampoco podemos declamar

que defendemos la aplicabilidad de algunas de las disposiciones de una misma norma y no su totalidad.

Señor Presidente:

Ya en 2005, cuando este Consejo adoptó la resolución 1593 (2005) para referir la situación en Darfur a la CPI, siendo la Argentina uno de sus miembros, sostuvimos que ciertos elementos de la resolución no debían convertirse en permanentes. Pero hoy la escena se repite, puesto que el texto que tratamos: a) refleja la intención de que la remisión afecte a determinados sujetos mientras que a otros no; b) permite excepciones al ámbito material de la jurisdicción de la Corte y a la obligación de cooperar con ella, y c) incluye una cláusula que indica que el Consejo “reconoce” que los gastos que demande esta remisión no serán sufragados por las Naciones Unidas, sino por los Estados Partes en el Estatuto o por contribuciones voluntarias, contrariando así lo dispuesto por el propio Estatuto.

¿Es que acaso hace falta recordar que el Consejo de Seguridad está en plena facultad de obligar a todos los Miembros de las Naciones Unidas, Partes o no Partes en el Estatuto de Roma, a cooperar con la Corte?.

Es decepcionante que este Consejo no haga concreta esa obligación ética.

En cuanto a las excepciones a la jurisdicción para nacionales de Estados no Partes en el Estatuto y el no financiamiento de las remisiones por las Naciones Unidas debo indicar no sólo la firme objeción de la Argentina a este tipo de cláusulas sino también nuestro entendido de cómo operan, incluso en las dos remisiones ya hechas:

Conforme el Estatuto de Roma, la Corte, en una remisión, ejerce su jurisdicción sobre nacionales de Partes y no Partes en el Estatuto de Roma. Ningún pronunciamiento del Consejo de Seguridad tiene la capacidad de enmendar el Estatuto para brindar inmunidad a nacionales de Estados no Partes que cometan crímenes del Estatuto en una situación remitida a la Corte. Es decir, nada en el texto del párrafo 7 o en cualquier otro párrafo del proyecto recién votado habría tenido la capacidad de alterar las normas del Estatuto ni en cuanto a la jurisdicción de la Corte en la situación, ni en cuanto a que, en definitiva, en caso de requerirse una decisión, es la misma Corte la jueza de su propia jurisdicción.

En lo que hace al financiamiento de las remisiones, la cláusula incluida en el párrafo 8 no se adecua al Estatuto de Roma y al Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte, y resulta a todas luces injusta. La Argentina disiente con que el Consejo pretenda indicar que los gastos que demande la remisión no sean sufragados por las Naciones Unidas. El Consejo no puede arrogarse facultades que no tiene, como la de decidir sobre el financiamiento de una remisión. Ello es competencia de la Asamblea General conforme la Carta, y resulta claro incluso en el texto del párrafo 8, que hace referencia a la Resolución de la Asamblea General 67/295. De allí que, en el momento en que lo considere oportuno, la Asamblea General, puede, siguiendo el Acuerdo de Relación con la Corte, decidir sobre el financiamiento de las remisiones hechas por el Consejo.

Sr Presidente,

Para finalizar ,quiero decir que es ésta una sesión extremadamente delicada y dolorosa. Lo que de buena fe nosotros tendríamos que haber hecho y no hicimos, esto es, “hablar con una única voz”, finalmente lo hizo la impotencia: innumerables víctimas han oído que este Consejo no pudo ponerse de acuerdo ni para detener la violencia que aniquila, ni para erradicar la impunidad que humilla, ni para contribuir a recuperar la paz perdida en Siria.

No obstante, “La noble misión y la función de la CPI en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, tal como dice la Declaración de Kampala, no nos da derecho a suponer que lo que hasta ahora no hemos logrado, sólo por eso tampoco lo vamos a lograr jamás.

Son demasiadas las injusticias que existen, como para no tener plena confianza en que este Consejo, más temprano que tarde, va a cambiar su concepción del poder y su modo de actuar.

Muchas Gracias

Mr. President,

Since we joined this Council in January 2013 and in numerous occasions, Argentina supported the referral by this Council of the situation in Syria to the International Criminal Court, so that the Court could impartially exercise its jurisdiction with regard to all parties in one of the most cruel, atrocious and overwhelming realities of our time.

Allowing the perpetuation of impunity to be the response to the crimes committed by all parties in Syria not only corrodes the ethical, political and legal foundations of the United Nations, but also the responsibility of this Council of maintaining international peace and security. It is untenable and even offensive to try to bring out the false dichotomy between peace and justice: we all have learned that there is no justice without peace and that peace is at risk without justice.

Following our political resolve, our ethical responsibility and respect for international law, Argentina voted in favour of the referral of the situation in Syria to the ICC. Our sole, firm and clear objective was the investigation and prosecution by the Court of perpetrators of crimes under the Rome Statute and the recognition of the inalienable right of victims to “truth, memory, justice and reparation”.

But at the same time Argentina decided not to cosponsor this initiative, because it was also our objective to preserve the integrity of the Statute, which requires that referrals by this Council be formulated in the adequate terms so as to not to undermine the legal foundations of the Rome Statute or its validity as well as the Court’s effectiveness.

Mr. President,

On the one hand, there seems once and again to be the purpose that we accept the exercise of selectivity when it comes to justice; that we are not surprised that faced with comparable situations where heinous crimes are committed are considered to be susceptible of being referred to the Court while not others.

On the other, there seems to be the purpose that we accept the belief that undermining the integrity of legal instruments does not in any way hinder the objective of achieving justice. Sometimes recourse is made to very sophisticated arguments, although mainly applying the pragmatic principle that the end justifies the means. But we learned from experience that not every means leads to the objective sought.

To Argentina, as well as many other Members, normal recourse to arbitrariness, legal regression and pragmatism without values are not valid options.

In our view, every heinous crime has to be taken to justice, wherever it is committed and by whomever. Just as with human rights it is not possible to maintain we respect some but not others, we cannot maintain we defend the applicability of some provisions of a norm, but not its entirety.

Mr. President:

Already in 2005, when this Council adopted Resolution 1593 (2005) referring the situation in Darfur to the ICC and being Argentina one of its members, we maintained that certain elements of the resolution should not become permanent. But today we face the same scenario, as the text of the draft: a) reflects the intention that the referral dealt with today affects certain subjects while not others; b) it admits exemptions from the material scope of the Court's jurisdiction and from the obligation to cooperate with the Court, and c) it includes a provision indicating that the Council "recognizes" that the expenses arising from this referral will not be defrayed by the United Nations but by States Parties to the Rome Statute or voluntary contributions, thereby contravening the provisions of the Rome Statute.

Is it necessary to remind that the Security Council has the power to oblige all Members of the United Nations -Parties and Non Parties to the Rome Statute- to cooperate with the Court?

It is disappointing that this Council does not put that ethical obligation into practice.

As regards exemptions to the jurisdiction for nationals of States non-Parties to the Statute and the non-financing of the referrals by the United Nations, I must state not only the firm objection of Argentina to this kind of provisions but also our understanding of their operation, including in the two referrals already made:

According to the Rome Statute, the Court, in a referral, exercises its jurisdiction over nationals of Parties and non-Parties of the Rome Statute. No pronouncement of the Security Council has the power to amend the Statute so as to grant immunity to nationals of States non-Parties committing Statute crimes in a situation referred to the Court. That is to say, nothing in the text of paragraph 7 or of any other paragraph of the draft just voted would have had the power to alter the norms of the Statute with regard to neither the jurisdiction of the Court in the situation nor the fact that, in case a decision is needed, the Court is, in the end, the judge of its own jurisdiction.

As regards the financing of the referrals, the provision included in paragraph 8 does not conform to the Rome Statute and the Relationship Agreement between the U.N. and the Court, and it is blatantly unfair. Argentina disagrees with the approach of the Council attempting to indicate that the expenses of the referral will not be defrayed by the United Nations. The Council cannot arrogate to itself a power it does not have, such as that of deciding on the financing of a referral. According to the Charter, that is a competence of the General Assembly. This is clear even in the text of paragraph 8, which refers to General Assembly resolution 67/295. The General Assembly, following the Relationship Agreement with the Court, decide in a timely manner on the financing of referrals made by the Council.

Mr. President:

I would like to conclude by expressing that this is an extremely delicate and painful session. What we should have done in good faith and failed, which is to "speak with one voice", was finally done by impotence: countless victims have heard this Council was unable to

reach agreement for stopping an annihilating violence and also to eradicate a humiliating impunity, and to recover Syria's lost peace.

But, "the noble mission and the role of the International Criminal Court in a multilateral system that aims to end impunity, establish the rule of law, promote and encourage respect for human rights and achieve sustainable peace, in accordance with international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations", as recalled in the Kampala Declaration does not allow us to assume as a fact that we will never achieve what we have not been able to achieve until now.

Injustices are too many for us not to be fully confident that this Council, sooner than later, will change both its idea of power and its ways.

Thank you